

13997/2019 CAMPESTRE TEPEPAN (MINISTERIO PÚBLICO) CAPITAL VARIABLE (CALLE MIRADOR, NÚMERO DIECIOCHO, COLONIA FUENTESDE TEPEPAN, DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14648)

13998/2019 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (TERCERO PERJUDICADO/INTERESADO)

13999/2019 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (TERCERO PERJUDICADO/INTERESADO)

14000/2019 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (TERCERO PERJUDICADO/INTERESADO)

14001/2019 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TERCERO PERJUDICADO/INTERESADO)

14002/2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (TERCERO PERJUDICADO/INTERESADO)

14003/2019 COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (TERCERO PERJUDICADO/INTERESADO)

14004/2019 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA (TERCERO PERJUDICADO/INTERESADO)

14005/2019 COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD (TERCERO PERJUDICADO/INTERESADO)

14006/2019 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TERCERO PERJUDICADO/INTERESADO)

14007/2019 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TERCERO PERJUDICADO/INTERESADO)

14008/2019 JEFE DELEGACIONAL EN TLALPAN (AUTORIDAD RESPONSABLE)

14009/2019 TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, EN LA DELEGACIÓN TLALPAN (AUTORIDAD RESPONSABLE)

14026/2019 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO (R.A. 304/2018)

EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO 171/2018-1, PROMOVIDO POR [REDACTED] SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

"Ciudad de México, siete de marzo de dos mil diecinueve.

Se tiene por recibido el oficio de cuenta firmado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en que remite el testimonio de la resolución dictada en sesión de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, por el órgano colegiado oficiante respecto del recurso de revisión 304/2018, del índice de ese órgano.

Hágase saber a las partes que el Tribunal Colegiado oficiante resolvió lo siguiente:

"[...]"

PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo de la sentencia impugnada.

"[...]"

Por tanto, gírese oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la aludida ejecutoria y remítase constancia de recepción.

Glósese al presente juicio el cuaderno de antecedentes, formado con motivo del recurso de revisión, previo desglose y destrucción de las copias fotostáticas que se dejaron con motivo de éste, ya que su conservación es innecesaria.

Por otra parte, vista la certificación que antecede y el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, ello en virtud de se trata de un juicio de amparo en el que se sobrepasó el presente juicio de amparo, una vez que transcurran cinco años, procedase a su destrucción, en cumplimiento al punto y acuerdo mencionados.

De igual forma, atento a lo ordenado en el segundo párrafo del artículo Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se hace constar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL y, por tanto, SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, según lo previsto en el numeral Vigésimo Primero fracción II; luego, una vez que transcurran los plazos de tres años, para su transferencia y el de cinco años para su destrucción, tramítense la misma en conformidad con los diversos puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, Décimo Octavo y Vigésimo Primero, fracción II, de dicho ordenamiento.

#### REQUERIMIENTO QUEJOSO

En virtud que en el presente expediente obran glosados diversos documentos originales, con apoyo en lo establecido en los puntos Décimo Primero, último párrafo y Vigésimo Primero, del multicitado Acuerdo, requiérase a la parte quejosa, para dentro del término de noventa días, comparezca en el local que ocupa este juzgado para recogerlos, apercibida que, de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.

#### INCIDENTE DE SUSPENSIÓN

Realícese el acuerdo de archivo correspondiente, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa y, procedase en términos del Acuerdo General conjunto 1/2009.

#### NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

Así lo proveyó y firma, Karina Cruz Campos, Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en Funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43 párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, de conformidad con la autorización otorgada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/569/2019, de doce de febrero de dos mil diecinueve, ante la Secretaria Carla Ivonne Ortiz Mendoza, quien da fe. Doy Fe. DOS FIRMAS ILEGIBLES."

Lo que comunico a Usted para su conocimiento y efectos legales conducentes.

Ciudad de México, siete de marzo de dos mil diecinueve.

ATENTAMENTE.

SECRETARIO DEL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE  
MÉXICO

LIC. Alejandro Barragán Hernández

**QUEJOSA Y RECURRENTE:**

[REDACTED]  
Y OTROS

**MAGISTRADO PONENTE:**

MIGUEL DE JESÚS ALVARADO  
ESQUIVEL

**SECRETARIA:**

ÁNGELES PATRICIA MARTÍNEZ  
GUTIÉRREZ

Ciudad de México, acuerdo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de **veintiuno de febrero de dos mil diecinueve**.

**VISTOS** para resolver los autos del recurso de revisión **304/2018**, del índice de este órgano colegiado, interpuesto por [REDACTED] Y OTROS, por propio derecho y como representante común de los demás quejosos, en contra de la sentencia emitida dentro de la audiencia constitucional de **veinticinco de junio de dos mil dieciocho**, terminada de engrosar el **treinta y uno de julio del mismo año**, emitida por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el expediente 171/2018; y,

**RESULTANDO:**

**PRIMERO.** Por escrito presentado el **catorce de**

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en  
Materia Administrativa en la Ciudad de México, [REDACTED]

[REDACTED] representante común),

[REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] C; [REDACTED]

[REDACTED] C, [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED],

[REDACTED], [REDACTED],

[REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED] E, V [REDACTED] S,

[REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED] J. [REDACTED]

[REDACTED] S, [REDACTED]

N. [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED] T., [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED] E

[REDACTED] J [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] por propio derecho, promovieron demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se especifican:

*"III. AUTORIDADES RESPONSABLES:*

*A). AUTORIDAD RESPONSABLE EN CALIDAD DE ORDENADORA:*

*El Titular o encargado del Despacho de la Delegación Tlalpan, denominado como Jefe Delegacional de Tlalpan, como Órgano Político Administrativo, con domicilio conocido en esta Ciudad de México".*

*B). AUTORIDADES RESPONSABLES EN CALIDAD DE EJECUTORAS:*

- 1) La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, de la Delegación Tlalpan, a cargo del señor Manual Santiago Quijano.*
- 2) La persona moral, la empresa BOSQUES DE TEPEPAN, con domicilio Calle El Mirador No. 18, Del. Tlalpan, Col. Fuentes de Tepepan, C.P. 14648, Ciudad de México".*

*"IV. LEY O ACTO QUE SE RECLAMA:*

*A). DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA.*

*Se reclama la orden de ejecutar la obra denominada PROYECTO DE ORDENAMIENTO VIAL o el PROYECTO PUENTE SAN BUENAVENTURA o PUENTE VEHICULAR PENSAMIENTOS, violando las formalidades esenciales del procedimiento en materia ambiental, así como la violación a la garantía de audiencia en el proceso por el que se llegó al acuerdo de iniciar dicha obra.*

*B) DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS:*

- 1). Se reclama la ejecución de la obra denominada PROYECTO DE ORDENAMIENTO VIAL O PROYECTO PUENTE SAN BUENAVENTURA o PROYECTO PUENTE VEHICULAR PENSAMIENTOS, el día 23 de enero del año 2018, sin que al efecto se cumplieran las formalidades esenciales del*

2). De la persona moral la empresa BOSQUES DE TEPEPAN, se reclama la ejecución de las obras del PROYECTO DE ORDENAMIENTO VIAL o PROYECTO PUENTE SAN BUENAVENTURA o PROYECTO PUENTE VEHICULAR PENSAMIENTOS, por orden de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, de la Delegación Tlalpan”.

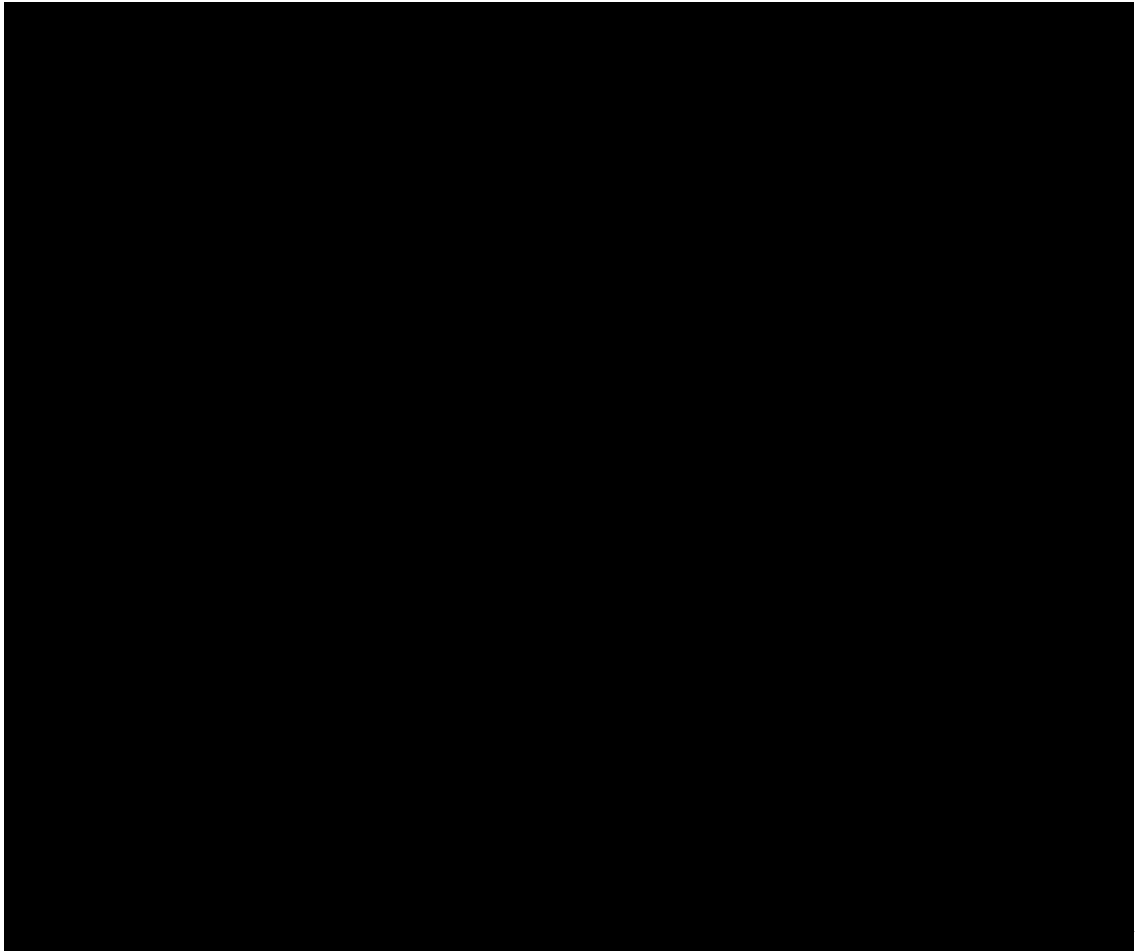
**SEGUNDO.** La parte quejosa señaló como preceptos violados en su perjuicio los artículos 1º, 4º, párrafo IV, 14, 16, 27, 28, 115, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y señaló como terceros interesados a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, Secretaría de Desarrollo Social, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Ecología, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Sistema de Aguas de la Ciudad de México y al Secretario del Medio Ambiente de la Ciudad de México e hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes.

**TERCERO.** De la demanda correspondió conocer por razón de turno, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien por acuerdo de **dieciséis de febrero de dos mil dieciocho**, la registró con el número de expediente 171/2018 y la desechó por improcedente.

**CUARTO.** Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, correspondiéndole

la radicó con el número QA-43/2018 y el **veintisiete de abril de dos mil dieciocho**, declaró fundado dicho recurso para el efecto de que se proveyera sobre la admisión de la demanda.

**QUINTO.** En cumplimiento a la anterior resolución, en auto de **quince de mayo de dos mil dieciocho**, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México admitió la demanda de amparo **únicamente** por



como representante común a la primera de los nombrados y desechó por los restantes porque en la demanda de amparo no obraba su firma autógrafa; asimismo, tramitó el incidente de suspensión, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, ordenó a emplazar a las autoridades responsables y requirió su informe justificado y; además, dio la intervención al agente del Ministerio Público.

**SEXTO.** Concluido el procedimiento, el **veinticinco de junio de dos mil dieciocho**, el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional y procedió a dictar sentencia, la que término de engrosar el **treinta y uno de julio del año en cita**, en la que resolvió:

*"ÚNICO. Se sobresee en el juicio".*

**SÉPTIMO.** Inconforme con la anterior resolución, [REDACTED] [REDACTED] por propio derecho y como representante común de los quejosos, interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turno, correspondió conocer a este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que por acuerdo de Presidencia del **tres de septiembre de dos mil dieciocho**, admitió a trámite, registrándolo con el número de expediente **R.A. 304/2018**.

**OCTAVO.** Mediante acuerdo de **doce de septiembre de dos mil dieciocho**, fueron turnados los presentes autos a la ponencia del Magistrado **Miguel de Jesús Alvarado Esquivel**, para la formulación del proyecto de resolución respectivo, en términos del artículo 92 de la Ley de Amparo.

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.** Este Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Amparo; 37, fracción IV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el contenido del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se trata de un recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional en un juicio de amparo indirecto, por un Juez de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en este circuito.

**SEGUNDO.** El recurso de revisión fue interpuesto por parte legítima, ya que se trata de [REDACTED] [REDACTED] por propio derecho y como representante común de los quejosos, que es a quienes perjudica la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio.

**TERCERO.** El recurso se interpuso dentro del término de **diez** días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, ya que el fallo recurrido se **notificó** por lista a la parte quejosa, el **siete de agosto de dos mil dieciocho** (foja **206** vuelta del juicio de amparo), surtiendo efectos el **ocho siguiente**, por lo que el referido término transcurrió del **nueve al veintidós de agosto del mencionado año**, tomando en cuenta que los días **once, doce, dieciocho y diecinueve del mes y año antes citado**, fueron inhábiles por tratarse de sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica

expresión de agravios se presentó el **veintiuno de agosto de dos mil dieciocho**, es inconcuso que su presentación fue oportuna.

**CUARTO.** Resulta innecesario realizar la transcripción tanto de la sentencia recurrida como de los agravios propuestos en su contra, por no ser un requisito exigido en el artículo 74 de la Ley de Amparo vigente.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página 830, de rubro y texto siguientes:

**“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.** De los preceptos integrantes del capítulo X “De las sentencias”, del título primero “Reglas generales”, del libro primero “Del amparo en general”, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para la juzgadora que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición

*realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”*

**QUINTO.** En la sentencia que es materia de impugnación, el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, **sobreseyó** en el juicio, respecto de la orden y ejecución de la obra denominada Proyecto de Ordenamiento Vial o Proyecto Puente San Buenaventura o Puente Vehicular Pensamientos, atribuido al **Jefe** Delegacional y al **Director** General de Obras y Desarrollo Urbano, ambos de la Delegación Tlalpan en la Ciudad de México, así como al particular responsable “**Campestre Tepepan**”, sociedad anónima de capital variable (en su denominación actual).

Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones:

#### **CONSIDERANDO TERCERO**

- **No son ciertos** los actos reclamados a las autoridades responsables –**Jefe** Delegacional (ordenadora) y **Director** General de Obras y Desarrollo Urbano (ejecutora), ambos de la Delegación Tlalpan en la Ciudad de México– consistente en la orden y ejecución de la obra denominada Proyecto de Ordenamiento Vial o Proyecto Puente San Buenaventura o Puente Vehicular Pensamientos, pues así lo manifestaron, al momento de la emisión de la sentencia,

quejosa, la carga probatoria para demostrar la existencia de dicho acto, lo cual en la especie no sucede.

- **Tampoco** debe tenerse por cierto el acto reclamado al particular responsable “Campestre Tepepan”, sociedad anónima de capital variable, a través de su representante, aun y cuando no rindió informe justificado; ya que la autoridad ordenadora negó el acto reclamado, e incluso una de las ejecutoras también lo hizo; de ahí que se debe sobreseer por lo que hace a las autoridades ejecutoras.

- Es aplicable la tesis de jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de rubro: ***“AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA.***

- La parte quejosa exhibió lo siguiente:
  1. Escrito de catorce de marzo de dos mil diecisiete dirigido a la Jefa Delegacional en Tlalpan, en el que se propone una vialidad perimetral y solución.
  2. Copia **simple** del oficio 59348 de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete derivado del expediente CNDH/DGQOT/2017/5353/R.<sup>1</sup>
  3. Copia **simple** de la convocatoria para la consulta ciudadana para definir el proyecto de ordenamiento vial que se implementará para coadyuvar en el

mejoramiento de la movilidad en la zona, firmada por la Directora General de Participación y Gestión Ciudadana de la Delegación en Tlalpan, el veintitrés de junio de dos mil diecisiete; así como el tríptico informativo.

4. Escrito de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, firmado por José Enrique Olmos Espinosa –persona por la cual se desechó la demanda de amparo–, dirigido al Director General del INVEA, **sin sello de recepción**.
5. Copia **simple** de solicitud de visita de verificación administrativa presentada el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, firmada por José Enrique Olmos Espinosa –persona por la cual se desechó la demanda de amparo–, teniendo como objeto a verificar la Calle de Pensamiento número 10, Colonia Ejidos de San Pedro Mártir, Delegación Tlalpan, Código Postal 14640, entre calles Sedral y Río San Buenaventura.
6. Escrito de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete dirigido al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales firmado por [REDACTED] con sellos de recepción del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete por la secretaría citada y la Comisión Nacional del Agua, en el que se pidió si la delegación solicitó asesoría y aprobación para llevar a cabo la obra y construcción de un puente vehicular sobre el río.

diciembre de dos mil diecisiete, **en original y copia simple**, firmado por la Directora General de Denuncias de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dirigido a María Reynalda Miranda Bautista, en el que se le hizo de su conocimiento que la unidad administrativa no localizó autorización de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Asimismo, le señaló que **en caso** de que el **proyecto** de ordenamiento vial, resultara ser una obra que requiera de una autorización de impacto ambiental emitida por la "SEMARNAT", al iniciarse las obras, ese órgano desconcentrado, por conducto de la Delegación en la Zona Metropolitana del Valle de México, se encontrará en posibilidad de verificar los términos y condicionantes del mismo.

8. Imágenes y un disco compacto que contiene imágenes (fotografías) y vídeos.

- *Es pertinente traer a cuentas que del contenido de los artículos 129 y 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se conoce, que el documento público es aquel cuya formación está encomendada por la ley a un funcionario público revestido de fe pública, en el ejercicio de sus funciones.*

- Por su parte, la documental privada es aquella que no reúne las características mencionadas en el párrafo

- Aunado a ello, se tiene que, para acreditar hechos o circunstancias, las partes podrán presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; documentos que atendiendo a sus características pertenecen a los documentos privados.

- Así, a las constancias señaladas con los incisos 2, 3 y 4 no se les puede conceder valor probatorio al ser exhibidas en **copias simples**; y aún en el supuesto de que se pudieran concatenar con las demás constancias no se advierte la existencia de los actos reclamados, pues se observa que el acto reclamado es todavía un **proyecto**.

- Incluso, se considera la inexistencia de los actos reclamados, pues de las constancias remitidas por las autoridades responsables se advierte que se realizó una consulta ciudadana el nueve de julio de dos mil diecisiete, para conocer la opinión de los residentes respecto al proyecto de ordenamiento vial para mejorar la movilidad de la zona en San Pedro Mártir (norte) de la Delegación Tlalpan.

- Es más, en el informe justificado rendido por el **Jefe Delegacional** y el **Director** General de Obras y Desarrollo Urbano, ambos de la Delegación Tlalpan en la Ciudad de México, mencionaron que se encuentra en gestión el "*Proyecto Puente Vehicular Pensamiento*", ya que señalaron lo siguiente:

*"[...] no se ha ejecutado ninguna obra o actividad que requiera previa autorización por parte de SEMARNAT; tal y como se acredita con copia certificada del Acta de Inspección por parte de PROFEPA, con número de acta de inspección PFPA/39.3/2c.27/3/037/18, orden de inspección PFPA/39/2C.27.3/037/18, de fecha veintinueve de mayo de la presente anualidad, suscrita por Ingrid Georget Ayala Oviedo y Roberto Hernández Moreno, en su carácter de inspectores de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México [...].*

- Asimismo, en el acta de inspección se advierte:

*[...] siendo las 11 horas con 30 minutos del día 29 del mes de mayo de dos mil (sic) 2018, [...] constituidos en calle Pensamiento, esquina Calle San Buenaventura,\* sito en la calle Pensamiento esq (sic) San Buenaventura, Colonia Ejidos de San Pedro Mártir, Municipio (Delegación) de Tlalpan, Estado de Ciudad de México [...]*

*[...]*

*Se verificó si en el sitio sujeto a inspección, se llevan a cabo obras o actividades que requieren previamente autorización de la SEMARNAT y en el momento de la presente visita **no se observa ninguna obra o actividad que requiera previa***



*cual se trata de una calle que se encuentra atravesada por un río (zona federal). A decir del visitado, se trata de un **proyecto** de puente vehicular, el cual permitirá el acceso en esta calle [...]*

- De lo anterior se conoce, que aún se encuentra en gestión el “**Proyecto** Puente Vehicular Pensamiento”, por lo que no se ha autorizado la orden y menos aún la ejecución del mismo, pues en la vida jurídica es inexistente.

- Asimismo, en relación a las fotografías y vídeos aportados por la parte quejosa se tiene que no cumplen con los requisitos que señala el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que no procede de un funcionario público revestido de fe pública en el ejercicio de sus funciones.

- *Luego entonces, las pruebas en estudio no cumplen con lo establecido por el numeral 133 del Código citado, pues no provienen de un funcionario público revestido de fe pública y en el ejercicio de sus funciones, como ya se indicó.*

- Conforme a lo anterior, se tiene que las documentales privadas consistentes en las fotografías y vídeos, únicamente acreditan, la fijación de ciertas imágenes y la grabación y reproducción de imágenes y sonidos a través de un medio electrónico, respectivamente, en determinadas circunstancias.

- *En ese sentido, las fotografías y los vídeos no se les concede valor probatorio, ya que **no cuentan con una certificación sobre el lugar, el tiempo y la circunstancia** en que fueron tomadas las imágenes y la grabación (lugar, fecha y modo) en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; además, no se encuentran concatenadas con diversa probanza a efecto de que pudieran perfeccionarse y constituir una prueba plena.*

- Además, de los mismos no puede obtenerse, ni siquiera indiciariamente que se trate precisamente de la orden y ejecución de la obra denominada Proyecto de Ordenamiento Vial o Proyecto Puente San Buenaventura o Puente Vehicular Pensamientos.

- Por tanto, las pruebas en análisis no causan convicción a este juzgador, y no desvirtúan la inexistencia de los actos reclamados.

- Por consiguiente, si las autoridades responsables negaron los actos materia del juicio constitucional y la **parte quejosa no ofreció ningún medio de prueba eficaz o idóneo para desvirtuar tal negativa**, debe concluirse que no se demostró la existencia de los actos reclamados y **procede sobreseer** en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo.

**SEXTO.** En los conceptos de violación, en esencia, se alega lo siguiente:

**AGRAVIO PRIMERO**

- El juez no es consistente con las constancias que existen en autos, pues si bien en el informe con justificación rendido por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan en la Ciudad de México, señaló que no eran ciertos los actos reclamados, también lo es que en el informe justificado rendido por el apoderado general para la defensa jurídica del Gobierno de la Ciudad de México en la Delegación Tlalpan se señaló: *"SON CIERTOS LOS ACTOS RECLAMADOS al Jefe Delegacional en Tlalpan."*

- Por lo que corresponde a la consideración en el sentido de que *"Tampoco debe tenerse por cierto el acto reclamado al particular responsable "Campestre Tepepan", S.A de C.V."*, debe indicarse que los quejosos señalaron a la persona moral "BOSQUES DE TEPEPAN", a quien se le reclamó la ejecución de las obras del PROYECTO DE ORDENAMIENTO VIAL o PROYECTO PUENTE SAN BUENAVENTURA o PROYECTO PUENTE VEHICULAR PENSAMIENTOS, nunca se señaló a la particular "Campestre Tepepan", S.A de C.V."

- Con lo anterior, evidentemente la A quo, conculca el artículo 17 constitucional, puesto que no se emite una sentencia en la cual se administre justicia en términos fijados

por el citado, ni mucho menos cumple con lo previsto en el artículo 74 de la Ley de Amparo.

- Así se tiene que la resolución recurrida, no cumple con lo establecido en el artículo de la Ley de Amparo, al ser incongruente, violando el artículo 17 de nuestro máximo ordenamiento.

- La fracción II, del artículo 74 de la Ley de Amparo, establece que toda sentencia debe contener el análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios.

- Como podrá observarse a simple vista, la Resolución recurrida, violó todos y cada uno de los principios que rigen las sentencias, los cuales, la doctrina y la jurisprudencia las han enmarcado en tres principales rubros:  
1. El principio de congruencia; 2. El principio de efectividad; y,  
3. El principio de exhaustividad.

- De lo anterior, se sigue que, en contravención del artículo 16 constitucional, la Sala Responsable omitió señalar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas por las que determinó que, aún y cuando se aceptó la existencia del acto reclamado, y que el apoderado general para la defensa jurídica del gobierno de la Ciudad de México en la delegación Tlalpan, únicamente solicitó se sobreseyera el juicio de amparo dada la inexistencia de los actos reclamados al Director General de Obras y Desarrollo

respecto del Jefe Delegación de Tlalpan, puesto que reconoció que son ciertos los actos reclamados atribuidos a dicha autoridad responsable.

- Dadas las discordancias señaladas, el Juez faltó a lo previsto en el artículo 16 de nuestra Constitución Federal, la Sentencia que se recurre no se encuentra adecuada y suficientemente fundada y motivada, por lo que resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 260, publicada en la página 175, Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN".

- Si el juez no consideró que se aceptó la existencia del acto reclamado atribuido al Jefe Delegacional de Tlalpan, y no se pronunció al respecto, quiere decir que su resolución viola el principio de congruencia.

#### CONCEPTO DE AGRAVIO SEGUNDO

- Causa agravio a los quejosos, que la autoridad recurrida, haya considerado que una vez que las autoridades responsables negaron los actos reclamados, no se aportó prueba alguna que desvirtuara tales circunstancias. Negando valor alguno a las pruebas aportadas por los quejosos.

- Aun cuando se ofrecieron pruebas documentales en copias simples, así como fotografías y videos, sin que al efecto estuvieran certificadas, las mismas resultaban ser indicios corroborados con la denuncia de los quejosos.

autoridades responsables que, por otro lado, aporlo pruebas, sin que sean suficientes para desvirtuar los actos reclamados, se podía cotejar con las aportadas por los quejosos.

- No pasa desapercibido el hecho de que las responsables aportaran las pruebas consistentes en las actas emitidas por las autoridades ambientales; sin embargo, las mismas se encuentran realizadas posteriormente a la fecha en la que se les atribuyó a las responsables la ejecución de los actos reclamados y ya se había otorgado la suspensión de los mismos, luego entonces, no pueden ser dichas constancias, suficientes como para demostrar la inexistencia de los mismos.

- Por lo que corresponde a los videos, es claro que los mismos se tomaron el día y en el lugar de los hechos, y de manera alguna, se estaba en posibilidad de autenticarlos con la fe de algún funcionario que la poseyera, es ahí donde entra el rigor de la apreciación de los mismos como indicios y hechos notorios, de lo contrario, ningún video podrá en ningún caso, servir como evidencia alguna.

- A mayor abundamiento, las autoridades responsables aceptan los hechos atribuidos al Jefe Delegacional de Tlalpan, no obstante que señalen que *“a través de la Dirección General de Participación y Gestión Ciudadana se gestiona el “Proyecto Puente Vehicular Pensamiento”*.

- De donde aceptan los hechos atribuidos al Jefe delegacional por conducto de citada Dirección y, por otro lado, de manera confusa, señalan que “*no se han ejecutado dicho proyecto*”, de donde ante la incongruencia de su aceptación, la recurrida se encontraba en posibilidad jurídica de solicitar su aclaración, lo que no sucedió en la especie, situación que ilegalmente se negó a los quejosos en la audiencia constitucional, alegando que esa era carga de la prueba de los quejosos.

- A fin de resolver lo efectivamente planteado, el Juez Federal está obligado a analizar íntegramente los argumentos contenidos en la demanda y las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como el acto reclamado, el informe justificado y las pruebas aportadas; de ahí la necesidad de que exista congruencia entre lo reclamado por el quejoso en su demanda, con lo manifestado en relación con tal aspecto por las responsables en el informe justificado; incluso, lo contenido en lo que la responsable acompañe como anexo a su informe; de no ser así, surge la facultad del Juez para requerir a las responsables, a fin de que aclaren el informe justificado, ante la inconsistencia de lo que en éste se señale con lo que se aduzca en la demanda.

- En abono a lo expuesto, se transcribe la tesis de rubro: “*INFORME JUSTIFICADO. SI EL JUEZ DE DISTRITO INADVIERTE QUE SU CONTENIDO ES INCONGRUENTE CON LOS ACTOS RECLAMADOS PRECISADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO Y POR ELLO OMITE REQUERIR*

A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA SU ACLARACIÓN, ESA CIRCUNSTANCIA CONDUCE A REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ESE EFECTO Y, EN SU CASO, SE REMITAN LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES.”; “PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO” y “PRUEBAS EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VIDEOS CONTENIDOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA QUE PUEDAN PRODUCIR CONVICCIÓN PLENA.”

- La demanda de amparo, debe ser interpretada en su integridad, invocando la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, de rubro: “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD”, situación que, a consideración de los recurrentes, no se dio en la especie.

- En la resolución recurrida no se hace mención alguna a la violación al párrafo quinto del artículo 4o Constitucional, luego entonces, es la recurrida quien, en efecto, no está viendo en su total integridad la demanda.

- La autoridad recurrida no tomó en cuenta que debe atender los criterios que favorezcan al individuo o lo que se



dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, argumentos hechos valer en el pliego inicial de demanda.

- Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano.

- El criterio señalado en el párrafo que antecede, es el sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación en las Jurisprudencias 1a./J. 107/2012 (10a.), y 1a./J. 104/2013 (10a.), las cuales señalan lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE" y "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ESTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES".

**SÉPTIMO.** Los conceptos de violación resultan jurídicamente ineficaces para revocar el sobreseimiento decretado por el juez de Distrito en el juicio de amparo

Por un lado, la parte recurrente el particular responsable, al que se le atribuyó la ejecución de las obras del Proyecto Puente Vehicular Pensamientos, fue a “Bosques de Tepepan”; sin embargo, en la sentencia se indicó que *“Tampoco debe tenerse por cierto el acto reclamado al particular responsable, Campestre Tepepan, sociedad anónima de capital variable”*; lo cual resulta incongruente.

De las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho se apersonó la apoderada de la empresa Campestre Tepepan, sociedad anónima de capital variable, y manifestó, bajo protesta de decir verdad, que esa empresa es la que realiza el proyecto Bosques de Tepepan.

Luego, resulta inconcuso que el juez de Distrito no incurrió en incongruencia alguna al referirse a la persona jurídica Campestre Tepepan, sociedad anónima de capital variable, en lugar de “Bosques de Tepepan”.

Por otro lado, la parte quejosa afirma que, contrario a lo sostenido por el juez a quo, el Jefe Delegacional en Tlalpan aceptó los actos reclamados al rendir su informe con justificación, además de que, en ningún momento, solicitó el sobreseimiento por los actos que le fueron atribuidos.

De la demanda de amparo se advierte que el acto que se atribuyó al Jefe Delegacional en Tlalpan fue “... la orden

*Vial o el Proyecto Puente San Buenaventura o Puente Vehicular Pensamientos...”.*

En el informe con justificación que rindió el apoderado general para la defensa jurídica del Gobierno de la Ciudad de México en la Delegación Tlalpan, en relación con el acto reclamado al Jefe Delegacional en Tlalpan, se manifestó lo siguiente:

*“SON CIERTOS LOS ACTOS RECLAMADOS al Jefe Delegacional en Tlalpan, consistente en que, a través de la Dirección General de Participación y Gestión Ciudadana, se gestiona el “Proyecto Puente Vehicular Pensamiento.*

*No obstante lo anterior, a la fecha NO SE HA EJECUTADO DICHO PROYECTO, pues como se manifestó en el informe previo, se encuentra en gestión; es decir, actualmente no se ha ejecutado ninguna obra o actividad que requiera previa autorización por parte de SEMARNAT...”*

Lo anterior, permite apreciar que, contrario a lo que afirma la parte quejosa, en el informe con justificación no se aceptó el acto que se reclamó del Jefe Delegacional en Tlalpan, consistente en la orden de ejecutar la obra denominada Proyecto de Ordenamiento Vial o el Proyecto Puente San Buenaventura o Puente Vehicular Pensamientos; lo único que se aceptó fue que, a través de la Dirección General de Participación y Gestión Ciudadana, se estaba gestionando el referido proyecto; incluso, se precisó que, a la fecha de la emisión del informe, no se había ejecutado el proyecto, por encontrarse en gestión.

Por tanto, resulta inconcuso, que no hubo una aceptación del acto reclamado al Jefe Delegacional en Tlalpan; de ahí que lo afirmado por la parte quejosa, resulta infundado.

Tomando en cuenta lo anterior, resulta infundado el argumento en el que se alega que, si bien, se ofrecieron pruebas documentales en copias simples, así como fotografías y videos, sin que al efecto estuvieran certificadas, las mismas resultaban indicios que, corroborados con la respuesta de la autoridad responsable, podían corroborar la existencia del acto reclamado.

Esto es así, pues al haber quedado desvirtuado que la autoridad responsable, Jefe Delegacional en Tlalpan, aceptó el acto que se le imputó, no existen elementos para, en su caso, corroborar o concatenar las pruebas ofrecidas por la parte quejosa.

Por los mismos motivos, deviene infundado el argumento en el que la parte quejosa alega que, como el Jefe Delegacional, por un lado, aceptó el acto atribuido y, por otro, señaló que no se había ejecutado el proyecto, el juez debió solicitar la aclaración del informe justificado; pues, como quedó establecido, la referida autoridad responsable no aceptó que se hubiera ejecutado el referido proyecto vehicular.

En otro aspecto, la parte quejosa alega que el juez no

la fecha en que se atribuyó la ejecución del acto reclamado, y ya se había otorgado la suspensión del acto.

Tal argumento resulta jurídicamente ineficaz, pues si bien, en la sentencia se aludió al contenido del acta de inspección que exhibieron las autoridades responsables, al rendir el informe con justificación, lo cierto es que dicha prueba no fue determinante para decretar el sobreseimiento del acto reclamado; ello, pues el juez se basó principalmente en la negativa de las autoridades, así como en el hecho de que las pruebas aportadas por la parte quejosa, no desvirtuaban dicha negativa.

Finalmente, resulta infundado el concepto de agravio en el que la parte quejosa afirma que el juez debió atender al principio pro persona, y emitir una resolución que favoreciera al individuo.

La circunstancia de que la quejosa solicite la aplicación del principio pro persona y la interpretación conforme de las disposiciones relativas para dar solución a este asunto, no se traduce en que deba resolverse favorablemente a su pretensión, ya que de ningún modo esos principios pueden dar cabida a una interpretación que no se deriva de la legislación respectiva o de los criterios emitidos por el alto tribunal, los que además son de observancia obligatoria para este órgano judicial en términos del precepto citado.

Funda lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

Décima Época, Libro XXV, octubre de 2013, página 906, que establece:

**"PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES.** Esta

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados

*sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes."*

Conforme a las anteriores consideraciones y al haberse desestimados los planteamientos de la quejosa, lo que se impone es **confirmar** la sentencia recurrida y **sobreseer** en el juicio.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 93 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve:

**PRIMERO.** Se **confirma** la sentencia récurrida.

**SEGUNDO.** Se **sobresee** en el juicio respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo de la sentencia impugnada.

**Notifíquese;** con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de origen; agréguese copia certificada de la sentencia recurrida, regístrese la presente ejecutoria en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por **unanimidad** de votos de los Señores Magistrados: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel (Presidente y

Velázquez, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Firman los CC. Magistrados integrantes de este Tribunal Colegiado con la Secretaria de Tribunal quien autoriza y da fe.

**APMG/tb\*mgm\***

